



NUE 251-A-2019 (YC)

Mejía Benítez contra Municipalidad de Ahuachapán

Resolución definitiva

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las ocho horas con cincuenta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

**Descripción del caso:**

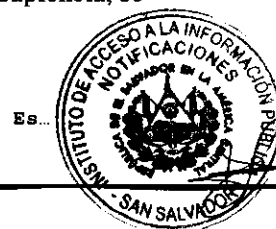
**A. Vanessa Roxana Mejía Benítez** (en adelante "el apelante") apeló ante este Instituto en contra de la resolución de referencia AMA-UAIP-088-2019(AC), emitida el siete de octubre de dos mil diecinueve por el oficial de información de la **Municipalidad de Ahuachapán** (en adelante "la municipalidad" o "ente obligado"), que denegó información consistente en:

1. Copia simple del testimonio de la escritura pública de donación del inmueble en el cual se construyó el proyecto habitacional denominado "Onofre Durán", ubicado en el cantón Chancuyo de la jurisdicción de Ahuachapán.
2. Copia del Convenio de Cooperación entre dicha Alcaldía y las instituciones: New Story, Gente Ayudando Gente y Fuller Center for Housing, para la construcción del proyecto habitacional "Onofre Durán".
3. El acuerdo municipal en el cual se estipularon los lineamientos o requisitos que se utilizaron para entregar dichas casas y en qué calidad se iban a entregar.

Al respecto, el oficial de información de dicho ente resolvió declararse imposibilitado para dar a conocer los requerimientos 1 y 3, en virtud que las unidades a las que se les requirió no emitieron respuesta a lo incoado"; y dar a conocer lo relacionado al requerimiento 2, anexando un archivo digital con el nombre "Convenio.PDF".

Por su parte, la recurrente manifestó su inconformidad con lo resuelto, pues no se le extendió la información solicitada; y además, que la información entregada está incompleta; circunstancia que constituye una violación al derecho de acceso a la información del ciudadano, según lo expuesto. En ese sentido, solicita que se admita el recurso de apelación incoado, se siga el trámite de ley y que se ordene al oficial de información de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán que emita la documentación solicitada.

**B.** El Instituto admitió la apelación y designó a la Comisionada Olga Noemy Chacón de Hernández para instruir el procedimiento, no obstante, al haber finalizado su período de suplencia, se



designó a la Comisionada **Yanira del Carmen Cortez** a efecto de dar continuidad al presente procedimiento.

El informe justificativo al que se refiere el Art. 88 de la LAIP fue rendido por **Fredy Armando Rodríguez Tobar** en su calidad de apoderado especial del ente obligado. En dicho informe manifestó en lo medular: *i)* que en relación al requerimiento 1, no existe la escritura que solicita como para poder darle la copia certificada, pero que la Municipalidad sí es la dueña de dicho terreno, lo cual puede ser corroborado por la solicitante en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Segunda Sección de Occidente de la Ciudad de Ahuachapán, ya que al ser un registro público cualquier persona puede consultar y/o obtener sin limitación alguna las certificaciones que necesite, esto de conformidad a lo establecido en el Art. 6 literal “c” de la LAIP, siendo el número de matrícula de dicho inmueble, el siguiente: 15028441-00000; y *ii)* que en relación al requerimiento 3, no existe un acuerdo específico bajo esa línea de información, pues lo que se tomó en cuenta fue el criterio sostenido en el Convenio de Cooperación entre la Asociación sin fines de lucro Gente Ayudando Gente El Salvador y la Alcaldía Municipal de Ahuachapán, el cual obedece al requerimiento 2, mismo que ya fue entregado a la apelante.

La audiencia oral se llevó a cabo de manera virtual en la fecha y hora señalada, por medio de la plataforma “Meet” de Google, con la comparecencia de la apelante **Vanessa Roxana Mejía Benítez** y el apoderado administrativo del ente obligado, licenciado **Fredy Armando Rodríguez Tobar**, manifestó contar con un incidente en relación al auto de las ocho horas con cincuenta minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinte, en el que se corrió traslado a la apelante para que manifestara su conformidad o no con la documentación proporcionada por el ente obligado, a lo que la apelante expresó que remitió escrito en fecha veinticinco de agosto, en el que establece su inconformidad, y no habiéndose ofrecido prueba para ser incorporada al procedimiento.

Posteriormente, se llevaron a cabo los alegatos, en los cuales ambas partes ratificaron sus posturas y peticiones a este Instituto.

#### ***Análisis del caso:***

Para el análisis que nos concierne, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** Principio de máxima publicidad y sus efectos; **(II)** Análisis del caso en concreto.

**I.** El principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir información, contenido en el Artículo 13 de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han establecido que

el derecho de acceso a la información debe estar regido por el “principio de máxima divulgación”<sup>1</sup>. Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de excepciones”<sup>2</sup>.

En ese orden, el Art. 4 letra “a” de la LAIP establece la máxima publicidad como principio rector del acceso a la información pública, el cual demanda que la información en poder de los entes obligados es pública y accesible y sometida a un régimen limitado de excepciones. Entonces, para garantizar dicho principio y el de disponibilidad, la LAIP configuró un procedimiento sencillo y expedito que facilite el acceso de la información pública a toda persona.

Asimismo, la Corte IDH, se ha manifestado sobre el principio de máxima publicidad, en el sentido que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, de manera que toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”<sup>3</sup>.

También, se puede interpretar que los efectos del principio de máxima publicidad frente a la información que produzca, administra o se encuentra en poder de los entes obligados<sup>4</sup>, son que: a) el derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción<sup>5</sup>; b) la carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al órgano que fue solicitada<sup>6</sup>; y, c) preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación<sup>7</sup>.

En relación a las limitaciones al DAIP se ha pronunciado la “Declaración Conjunta de 2004, de los relatores para la libertad de expresión”, en la que se efectuó una formulación sintética de los requisitos que deben cumplir las limitaciones al derecho de acceso a la información: que “el derecho

<sup>1</sup> Corte IDH., *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 93; Corte IDH., *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil*. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230.

<sup>2</sup> CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08), *Principios sobre el derecho de acceso a la información*, 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7. Disponible en: [http://www.oas.org/cji/CJI\\_RES\\_147\\_LXXIII\\_O\\_08.p](http://www.oas.org/cji/CJI_RES_147_LXXIII_O_08.p)

<sup>3</sup> Corte I.D.H.- *Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil*. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C, N° 219, párrafo 230.

<sup>4</sup> El Art. 7 de la LAIP, contiene quiénes son los entes obligados a la mencionada ley.

<sup>5</sup> Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico interamericano, segunda edición. 2012.

<sup>6</sup> Ídem

<sup>7</sup> Ídem



de acceso a la información deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones cuidadosamente adaptado para proteger los intereses públicos y privados preponderantes, incluida la privacidad”, que “**las excepciones se aplicarán solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información**”, y que “la autoridad pública que procure denegar el acceso debe demostrar que la información está amparada por el sistema de excepciones”<sup>8</sup>.

II. Para el caso en comento, el ente obligado no entregó la información relativa a los requerimientos 1 y 3 debido a que la misma no se encuentra en los archivos de dicha municipalidad, según lo expuesto. En cuanto al requerimiento 2 sostiene que el mismo ya fue entregado.

A. Entonces, el Art. 6 letra “c” de la LAIP establece que la **información pública** es aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial.

Con relación a este tipo de información y de conformidad al principio de transparencia activa, existe cierto tipo de información pública que tiene que estar disponible, completa y actualizada para toda persona sin necesidad que se realicen solicitudes de información para obtenerla, surgiendo así la categoría de **información pública oficiosa**, la cual se encuentra desarrollada en el Art. 10 de la LAIP.

Asimismo, este Instituto ha establecido que la **información pública oficiosa** se pondrá a disposición del público por cualquier medio, tales como páginas electrónicas, folletos, periódicos u otras publicaciones; en este sentido, ningún ente obligado por la LAIP podrá negar información de este tipo con el pretexto de no contar con los medios idóneos para compartirla.

B. En el caso de mérito, con la finalidad de dar cumplimiento a lo regulado por la LAIP y como garantes de la tutela del Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP), este ente colegiado ha analizado el expediente administrativo remitido por el ente obligado conjuntamente con todas las actuaciones seguidas en el presente procedimiento, se hacen las siguientes consideraciones:

i) en relación al requerimiento 1: **“copia simple del testimonio de la escritura pública de donación del inmueble en el cual se construyó el proyecto habitacional denominado “Onofre Durán”.**

---

<sup>8</sup> Declaración Conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión (2004). Disponible en: [http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos\\_basicos/declaraciones.asp](http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp)

ubicado en el cantón Chancuyo de la jurisdicción de Ahuachapán”, el ente obligado ha confirmado que en efecto dicha municipalidad es propietaria del inmueble en mención, no obstante, alegan no tener el testimonio de la escritura solicitada y en razón de ello remiten a la apelante al Centro Nacional de Registros (CNR) para que pueda obtenerla bajo el número de matrícula que señalan en el informe de ley rendido.

No obstante, partiendo de que la municipalidad es propietaria de dicho inmueble, está obligada a tener en su poder el testimonio de la escritura pública por medio de la cual aceptaron dicha donación, pues si bien no es información que haya sido generada en dicho ente, representa un título de propiedad que acredita un activo fijo del haber municipal, por lo que, dicha escritura es información que debe estar resguardada en sus registros.

En ese sentido, no pueden sólo remitir a la apelante a otra Institución cuando lo solicitado obedece a una copia simple, máxime cuando en el CNR, si bien es un registro público, acceder a dicha información está sujeto al pago del arancel respectivo.

Por tanto, no hay una razón válida para que el ente obligado no entregue lo solicitado. De ser cierto que dicho documento no está en poder de dicha municipalidad, deberá ser este ente quien realice las gestiones necesarias en el CNR para poder satisfacer el requerimiento de la apelante en copia simple.

ii) i) en relación al requerimiento 2: “copia del Convenio de Cooperación entre dicha Alcaldía y las instituciones: New Story, Gente Ayudando Gente y Fuller Center for Housing, para la construcción del proyecto habitacional “Onofre Durán”. Sobre este punto, este Instituto ha podido verificar en el expediente administrativo remitido que el mismo ya fue entregado, por lo que es procedente confirmar la resolución impugnada al respecto.

iii) en relación al requerimiento 3: “el acuerdo municipal en el cual se estipularon los lineamientos o requisitos que se utilizaron para entregar dichas casas y en qué calidad se iban a entregar”, es pertinente afirmar que este requerimiento constituye **información pública oficiosa**, pues se enmarca en el artículo 17 de la LAIP. Por ello, la **Municipalidad de Ahuachapán** no puede dejar de cumplir con su obligación de conceder el acceso a lo solicitado cuando de acuerdo a lo expuesto por la apelante, las casas del complejo que se están construyendo en el complejo habitacional “Onofre Durán” ya se están entregado a los beneficiarios, por lo que dicha decisión ya debió ser aprobada por dicho Concejo Municipal, y en consecuencia, la misma debe constar en acta.

C. Por tanto, no ha quedado acreditada alguna imposibilidad legal para entregar los requerimientos 1 y 3, razón por la que es oportuno **modificar la decisión de la oficial de información**



del ente obligado y ordenar la entrega de estos. No obstante lo anterior, con relación al requerimiento 3, resulta procedente ordenar al ente obligado realizar las siguientes acciones:

Realizar una nueva búsqueda de la información referente al: **“el acuerdo municipal en el cual se estipularon los lineamientos o requisitos que se utilizaron para entregar las casas del proyecto habitacional “Onofre Durán” y en qué calidad se iban a entregar”**. Dichas diligencias de búsqueda deberán realizarse por medio del Jefe de Gestión Documental y Archivo de esa municipalidad, sin limitarse a un solo registro o unidad/dependencia administrativa de dicho ente, por lo que deben buscar en todos los archivos de las Unidades Organizativas que objetivamente pudieran haber tenido relación con dicho proceso, y por consiguiente, en el caso de encontrarla, deberán entregar dicha información, en tanto existe un **interés público evidente para los afectados por dicho proyecto habitacional**.

En caso de no encontrarse la información en controversia, se deberá declarar su inexistencia, relacionando mediante informe, todas las diligencias de búsqueda y los hechos que surjan de dicha diligencia. Lo anterior, en virtud de la naturaleza de la información solicitada, por ser de naturaleza eminentemente pública.

### **3. Decisión del caso:**

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y los Arts. 2, 6, 85 y 86 de la Cn; 52 Inc. 3º, 58 letra “d”, 94, 96 letra “d” y 102 LAIP; a nombre de la República de El Salvador, este Instituto **RESUELVE**:

**a) Modificar** la resolución de referencia AMA-UAIP-088-2019(AC), emitida el 7 de octubre de 2019 por el oficial de información de la **Municipalidad de Ahuachapán**, por los motivos expuestos en la presente resolución.

**b) Ordenar** al titular o máxima autoridad de la **Municipalidad de Ahuachapán** que, dentro del plazo de **diez días hábiles** contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, realice las gestiones descritas en el romano II letra “B” del apartado “Análisis del caso”, para entregar – a través de su oficial de información – a la ciudadana **Vanessa Roxana Mejía Benítez**, la *“copia simple del testimonio de la escritura pública de donación del inmueble en el cual se construyó el proyecto habitacional denominado “Onofre Durán”, ubicado en el cantón Chancuyo de la jurisdicción de Ahuachapán”*, por ser información de naturaleza eminentemente pública y que la municipalidad está obligada a resguardar en sus archivos.

c) **Ordenar** al titular o máxima autoridad de la **Municipalidad de Ahuachapán**, que por medio de su oficial de información, dentro del mismo plazo concedido en el literal “b” de esta parte resolutive, realicen lo siguiente: una nueva búsqueda del *acuerdo municipal en el cual se estipularon los lineamientos o requisitos que se utilizaron para entregar las casas del proyecto habitacional “Onofre Durán” y en qué calidad se iban a entregar*, de conformidad a lo dispuesto en la letra “C” romano II del apartado “2- Análisis del caso”, por ser información de naturaleza pública oficiosa, de conformidad al art. 17 de la LAIP. Una vez finalizada la búsqueda deberán entregar a **Vanessa Roxana Mejía Benítez** la información solicitada por su carácter de público; y, en el caso de no encontrarla, deberán entregar la **declaratoria de inexistencia junto con todas las diligencias de búsqueda** que surjan, de conformidad al art. 73 de la LAIP.

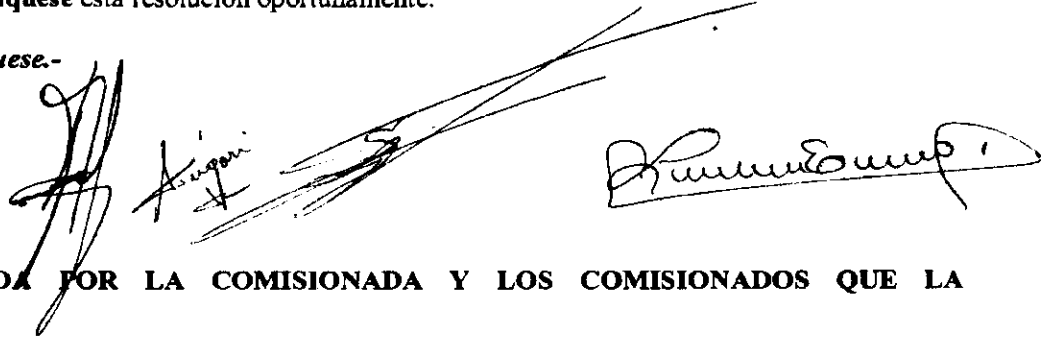
d) **Ordenar** al titular o máxima autoridad de la **Municipalidad de Ahuachapán**, que dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo estipulado en la letra “b”, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de las obligaciones contenidas en las letras “b)” y “c)” de esta parte resolutive, el cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada al apelante, así como su recepción, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe deberá ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

e) **Hacer saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede, pues con esta resolución queda agotada la vía administrativa de conformidad al Art. 131 de la LPA, quedando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

f) **Remitir** el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

g) **Publíquese** esta resolución oportunamente.

*Notifíquese.-*



**PRONUNCIADA POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN**

JH/CC/RP

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los veintidós días del mes de enero de dos mil veintiuno.

José Augusto Hernández Funes  
NOTIFICADOR  
IAIP

